

EDITORIAL

Fiestas clandestinas

Las fiscalizaciones prometidas por las delegaciones presidenciales, Carabineros y los municipios deben ser efectivas, oportunas y sostenidas en el tiempo. No basta con clausurar un evento después del escándalo: la prevención es clave. Pero también hay una responsabilidad social. Los vecinos y vecinas tienen un rol fundamental: denunciar, alertar, colaborar. No se trata de fomentar el control policial excesivo, sino de proteger la seguridad de nuestras comunidades y, especialmente, de nuestros jóvenes.

Nuble enfrenta hoy un fenómeno que no es nuevo, pero que sí ha adquirido nuevas formas y riesgos: las fiestas clandestinas. Lo que alguna vez fue una reunión privada o una actividad barrial, hoy ha mutado, en muchos casos, hacia eventos masivos, sin regulación, sin controles y con múltiples peligros para los asistentes y las comunidades en las que se realizan.

Durante la última sesión de la Mesa Regional de Seguridad, las autoridades reconocieron su preocupación. Lo que se ha detectado en diversas comunas de Ñuble -especialmente en sectores rurales, donde la fiscalización es más débil- es el uso irregular de permisos municipales, solicitados supuestamente para fines comunitarios o benéficos, que luego derivan en fiestas comerciales de gran escala, con consumo de alcohol y drogas, venta de entradas y sin ningún tipo de resguardo sanitario o de seguridad.

El seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, lo graficó sin eufemismos: “estamos frente a un negocio abierto y descarado”, que se esconde tras el manto de la buena fe vecinal y que ha logrado aprovechar vacíos normativos y una débil fiscalización para operar con total impunidad. La delegada presidencial de Punilla, Rocío Hizmeri, constató que en muchos de estos eventos se expende alcohol a menores, se venden alimentos sin autorización sanitaria y se sobrepasa ampliamente la capacidad de los recintos. Hay casos en que se autorizó una reunión para 200 personas y terminaron recibiendo a más de 800, sin

protocolos de seguridad, ni medidas de evacuación. El riesgo es evidente.

Detrás de estas fiestas hay organizadores que no se preocupan por los asistentes ni por el entorno y la vida en comunidad. Sólo hay un afán de ganancia, a costa de poner en riesgo la salud, la seguridad y la integridad de cientos de jóvenes.

Frente a esto, el Estado debe responder. Las fiscalizaciones prometidas por las delegaciones presidenciales, Carabineros y los municipios deben ser efectivas, oportunas y sostenidas en el tiempo. No basta con clausurar un evento después del escándalo: la prevención es clave. Y para ello, los municipios deben contar con recursos y coordinación, especialmente en el mundo rural.

Pero también hay una responsabilidad social. Los vecinos y vecinas tienen un rol fundamental: denunciar, alertar, colaborar. No se trata de fomentar el control policial excesivo, sino de proteger la seguridad de nuestras comunidades y, especialmente, de nuestros jóvenes, quienes muchas veces participan de estos eventos sin saber los riesgos que enfrentan.

Asimismo, debe profundizarse la educación preventiva. En escuelas, liceos y espacios comunitarios hay que hablar de estos temas. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Las fiestas clandestinas no son inofensivas: han terminado, en distintos puntos del país, en tragedias que pudieron evitarse. Ñuble no puede esperar a tener una de esas páginas oscuras para tomar medidas.